

Bernd Hausberger

Las elecciones de prior, cónsules y diputados en el Consulado de México en la primera mitad del siglo XVIII: la formación de los partidos de montañeses y vizcaínos

El desarrollo del Consulado de México, en la primera mitad del siglo XVIII, se caracteriza por la permanente polémica alrededor de las elecciones de electores, prior, cónsules y diputados. En estas peleas se perfilaron dos grupos de denominación étnica dentro del Consulado, los vizcaínos y los montañeses,¹ que cada dos años se disputaban el control sobre la corporación. En una primera fase, caracterizada por el espectacular aumento de votantes, quienes llegaron a sobrepasar los 670, la existencia de los partidos étnicos aún no se dejaba reconocer claramente. La controversia, en ese momento, se centraba en excluir de los comicios al comercio provincial, así como a todos los comerciantes que manejaban tiendas públicas al menudeo. En 1729, los almaceneros de la ciudad de México lograron finalmente imponerse, al reservarles la Corona el derecho de voto. A partir de entonces, se observa con toda claridad la riña, ya iniciada antes, entre vascos y montañeses, que habría de prolongarse hasta que la Corona introdujera la llamada “alternativa”, que entró en vigor por primera vez en la elección de 1743. A partir de este año los dos grupos se alternaron en el gobierno hasta finales del periodo colonial.

El presente ensayo se plantea dos objetivos: en primer lugar, pretende reconstruir el proceso electoral; en segundo lugar, proponer algunas hipótesis sobre cómo se formaron las redes de interés dentro de la institución y qué papel desempeñó en este proceso el factor étnico.

¹ “*Montañes*. Por antonomasia se entiende el de la Montañas de Burgos” (*Diccionario* 1990 [1726-39], II [IV]: 600), es decir, los habitantes de la región montañosa al norte de Burgos hasta la costa de Santander.

1. El proceso electoral

En términos generales, el procedimiento que había que observar en las elecciones obedecía al reglamento del Consulado de México, fijado en la *Recopilación de las Leyes de Indias* (*Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46). Estas reglas, aunque muy detalladas en algunos puntos, dejaban abiertas ciertas cuestiones.

Si bien se celebraban elecciones cada enero, sólo la duración en el cargo de los diputados era de un año, mientras que la de los electores, el prior y los cónsules era de dos años. El proceso electoral empezaba cuando el virrey nombraba, de entre los oidores de la Audiencia, al juez de alzadas, quien como representante del rey vigilaba la elección y la jurisprudencia del Consulado durante el bienio de un prior. Después, se convocaba a los comerciantes para la elección de 30 electores, los que a su vez elegían al prior, a uno de los dos cónsules y a cinco diputados en el primer año, así como al segundo cónsul y a los otros cinco diputados en el segundo año. El prior se sometía a un proceso de reelección, lo que parece haber sido una formalidad, porque nunca le fue negada, al menos en el periodo estudiado.

Esto, a primera vista, parece ser un procedimiento simple, sin embargo, implicaba el uso de diversas argucias. Llama la atención que los sistemas de elección en los consulados de Sevilla, México y Lima hayan sido tan diferentes, lo que probablemente obedecía a las circunstancias concretas en la época de su respectiva fundación y fue resultado de las negociaciones entre los comerciantes y la Corona. Alguna explicación requiere el hecho de que los comerciantes no eligieran a los líderes de su gremio directamente, sino a través de electores. El procedimiento de la votación de aquéllos no consistía en que cada concurrente eligiera a una persona, saliendo electas las treinta más votadas, sino en que cada uno depositaba en la urna una papeleta con 30 nombres, y la lista con más votos resultaba la de los electores.² Lo que resulta obvio es que este procedimiento daba un amplio margen a que grupos de interés bien organizados impusieran su voluntad en la elección, eliminando la posibilidad de que la masa de los votan-

² “[...] dando cada vno de los que á esta eleccion vinieren vna memoria, ó lista de los nombres de los que assí nombrare por Electores, [...] las quales reguladas, queden señalados, y nombrados los que tuvierén mas votos en aquellas listas, ó memorias” (*Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46, ley 6).

tes le otorgara la mayoría a candidatos imprevistos, ya que resultaba imposible que una lista hecha por alguien que no consultara a otros encontrara la mayoría. Ésta sólo se pudo alcanzar mediante fuertes negociaciones y arreglos previos. La fase fundamental de la elección, por lo tanto, no fue la del prior, cónsul y diputados, sino la de los electores, dado que los miembros de la lista ganadora ya se habían puesto de acuerdo sobre el resultado final.

Igualmente importante y discutida que la elección de los electores fue la definición de quién tenía derecho al voto y quién no. Para imponer una lista de electores resultaba muy conveniente manipular el número de los votantes. Quien podía hacer votar a su gente e impedir el acceso a la urna de los adversarios, podía contar de antemano con la victoria de su lista de electores. La ley definía a los que podían ejercer voto activo o pasivo en las elecciones del Consulado de la manera siguiente:

[...] han de ser hōbres de negocios, Mercaderes casados, ó viudos, de mas de veinte y cinco años, y tener casa por sus personas en la Ciudad, y no han de ser estrangeros de estos nuestros Reynos; y no se entienda que lo son los de la Corona de Aragon, ni Reyno de Navarra: ni han de ser Escrivanos, ni criados de otras personas, ni Letrados, [...]. Y porque para el Consulado de Mexico está dispuesto, que no entren en esta eleccion los que tuvierén tienda publica de sus oficios, ni los que tuvierén tienda de mercaderias de Castilla, China, y las que se tratan, y hazen en la Nueva España: con declaracion, que esto no se entienda con los mercaderes que tuvierén tiendas, y en ellas vendieren solamente las mercaderias, que por su cuenta, ó por encomienda les vinieren consignadas, ni con Mercaderes, tratantes en los Reynos, y Provincias del comercio del dicho Consulado [...] (*Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46, ley 5).

En otro lugar se especifica sobre las cualidades que el prior y los cónsules debían satisfacer, además de que tenían que estar casados o ser viudos de más de 30 años y no ser considerados extranjeros:

Que tengan casa de por sí en la Ciudad donde fueren elegidos. Que sean hōbres honrados, de buena opinion, vida, y fama, abonados, y ricos, en cantidad de mas de treinta mil ducados los de Lima, y mas de veinte mil los de Mexico, y que estos de Mexico para ser Consules, sean Cargadores, por sí, ó sus Encomenderos, en cantidad de dos mil pesos cada año, y hayan cargado dos años antes que sean elegidos, y no tengan tienda publica en que ellos asistan, por sí, ni por encomienda, ni la hayan tenido dos años antes de su elección: que no hayan sido Oficiales de ningun oficio, ni tenido tratos humildes, y baxos, y que no sean, ni hayan sido Escrivanos, ni sean Letrados, ni puedan ser elegidos en vn año dos hermanos, ni padre, y hijo, ni dos, que sean compañeros de vna compañía: y

assimismo no se ha de elegir á ninguno que huviere sido Prior, y Consul en los dos años antecedentes (*Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46, ley 11).

De estas leyes, al menos a principios del siglo XVIII, se interpretó que los comerciantes provincianos podían acceder a las elecciones. Así las cosas, en el Consulado no solamente votaron los grandes mercaderes capitalinos, sino también cualquier persona capaz de comprobar que ejercía el comercio en alguna parte de la Nueva España, inclusive los flotistas españoles que llegaron a México. La participación de estos últimos era “inveterada costumbre”, según lo expresó el prior Domingo de la Canal en 1718.³ Así que, por ejemplo, en 1712 se encontraban, entre los matriculados, 49 comerciantes de la última flota arribada a Veracruz con las mercancías traídas de Europa; en 1723 se registraron, entre otros, 9 comerciantes provinciales de Chihuahua, y en 1727 acudieron a votar al menos 208 forasteros, entre ellos 60 de Puebla, 25 de Querétaro, 10 de Tlaxcala, 10 de Pachuca y 8 de Atlixco.⁴ Los provincianos, sin embargo, no podían ser elegidos, porque el cargo les hubiera obligado a trasladarse efectivamente a la ciudad de México por un lapso mínimo de dos años.⁵ No significaban, pues, sino una masa de votos, de la cual los interesados de la capital pudieron echar mano. Alguno que otro comerciante provinciano, dependiente de su aviador capitalino, es probable que sólo obedeciera a los deseos de su suministrador de mercancías y crédito cuando votaba. Por otro lado, es de suponer que el medio centenar de flotistas que se presentó para la elección de 1712, o el gran grupo de mercaderes de la región de Puebla-Tlaxcala que lo hizo en 1727, hayan negociado con los almaceneros mexicanos su voto. Sea como sea, del hecho de que no se conocen protestas de las regiones por su posterior exclusión de las elecciones se puede suponer que el provecho real que sacaban de su participación y, por lo tanto, el interés por seguir participando no fueron muy grandes.

³ Informe de Domingo de la Canal, prior, Francisco de Ugarte y Nicolás de Eguía-
ra, cónsules, México, 23 de febrero de 1718, AGI, Méx. 742. Fray Agustín de
Vetancurt (1990-91 [1698]: II, 263) incluso da a entender que a finales del siglo
XVII los flotistas españoles, cuando se encontraban en el país, lo que no siempre
fue el caso, tenían derecho a señalar a la mitad de los electores.

⁴ En la matrícula no queda siempre claro el avecindamiento de los matriculados.

⁵ Véase también *Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46, ley 11.

La participación de los forasteros, no obstante, siempre fue un asunto muy discutido.⁶ Se hacía especial hincapié en que el número excesivo de votantes dificultaba considerablemente el proceso electoral, ya que era muy difícil controlar si los provincianos que se presentaban realmente cumplían con los requisitos para el voto. Para definir el grupo de los votantes, a veces se elaboraba una matrícula, es decir, una lista oficial de las personas con derecho a tomar parte en la elección. Ésta, al parecer, se realizó de manera muy irregular hasta el primer cuarto del siglo XVIII, y sólo se introdujo como norma a partir de 1718, como consecuencia de las pugnas que se habían producido en los años anteriores.⁷ La matrícula debía llevarse a cabo los primeros días del mes de enero de cada segundo año, bajo la supervisión del juez de alzadas, el prior y los dos cónsules en función, así como unos calificadores nombrados para esta tarea. Ya que el número de gente que acudía a las elecciones creció constantemente durante las tres primeras décadas del siglo XVIII, la calificación se pudo realizar cada vez con menos meticulosidad. Hay que pensar que el sufragio de los forasteros resultaba, a la larga, también costoso para los almaceneros, quienes tenían que comprar el voto, aunque esto sólo fuera brindando hospedaje a algún provinciano durante el periodo de los comicios. Así, en 1729, los mercaderes forasteros finalmente fueron excluidos para agilizar el proceso, sobre lo que todavía se va a hablar más adelante.

Antes de 1729, los diferentes grupos de interés que se disputaban el control sobre el Consulado aprovecharon la práctica vigente para acarrear el mayor número posible de simpatizantes de las provincias a la ciudad. Esto tenía como consecuencia que la votación fuera reñida y el resultado incierto. Pero, a partir de que en 1729 se excluyó del sufragio a los forasteros y el número de votantes se redujo al núcleo de poder del comercio, la batalla electoral se centró definitivamente en la matrícula. El debate versó, sobre todo, en torno a si los posibles votan-

⁶ Real Cédula, Buen Retiro, 21 de agosto de 1715, AGNM, Cons. 268, exp. 2, f. 40r-41r.

⁷ “[...] no estar dispuesta por la ley y que aunque algunas veces se había hecho para algunas elecciones, pero esto había acontecido muy raras veces y lo contrario era lo más común y corriente”; Petición de los electores y comerciantes, México, s. f. [10 de enero de 1718], AGI, Méx. 742. En los 47 años anteriores a la elección de 1718 se efectuaron sólo tres matrículas; Informe de Domingo de la Canal, prior, Francisco de Ugarte y Nicolás de Eguara, cónsules, México, 23 de febrero de 1718, *ibid.*

tes eran de verdad comerciantes almaceneros de la capital y si no hacían comercio al menudeo, al menos no personalmente. Como el grupo de los votantes se redujo, también fue más fácil manipular el resultado del proceso. Así que, entre 1729 y 1741 (año en que se celebró la última elección antes de que se introdujera el sistema de la “alternativa”), una vez concluidas las matrículas ya no se puede hablar de auténticas elecciones, salvo en el año de 1733. Según lo revelado por los autos de los procesos electorales, sólo la parte vencedora en la matrícula acudía a la elección de los electores, quienes fueron aceptados prácticamente sin votos en contra.

2. La polémica de las elecciones de 1712-1743

Aquí no hay espacio para describir en todo detalle las elecciones y las peleas que se levantaron en torno a ellas. Ya había conflictos abiertos en las elecciones de principios de siglo, pues para 1702 y 1706 se hablaba de “escándalos [...] entre las parcialidades que se habían declarado”.⁸ Los virreyes emitieron diferentes reglamentos para establecer el orden, por ejemplo, el 31 de diciembre de 1701 para arreglar la participación de los flotistas, o el 7 de enero de 1706 para la correcta calificación de los comerciantes forasteros, pero no dieron el resultado deseado.⁹

El tema de los comerciantes forasteros dominó la discusión en estos años. En 1712 se discutió su participación en general,¹⁰ y después se desencadenó un rudo enfrentamiento por la forma en que la matrícula se llevó a cabo en ese año. En consecuencia, se lanzó una protesta contra la elección de los electores del 7 de enero, porque en la matrícula se había admitido a gente no apta y sin la correcta calificación.¹¹ Después de escuchar los argumentos, el virrey reaccionó rápidamente y ordenó la repetición de la matrícula y de la elección de los electores.

⁸ Licenciado Félix González de Agüero al virrey duque de Linares, México, 8 de enero de 1712, AGI, Méx. 742, pieza sin número, f. 34r, f. 35r.

⁹ Consulta del juez de alzadas, prior y cónsules, México, s. f. [9 de enero de 1712], *ibid.*, f. 27r-27v.

¹⁰ Licenciado Félix González de Agüero al virrey duque de Linares, México, 8 de enero de 1712, *ibid.*, f. 34v-35r.

¹¹ Petición del capitán Juan Antonio de Mantilla y Castro, Simón de Pastrana, el alférez Felipe Díez de Palacios y el alférez Gerónimo de Astorga, México, 8 de enero 1712, *ibid.*, f. 25r-27r.

Al mismo tiempo, identificó a Domingo de la Canal y Francisco Ugarte como los causantes de las discordias, y los amenazó con una multa si no colaboraban en evitar escándalos.¹² La nueva matrícula se realizó el 13 y el 14 de enero y la elección definitiva se llevó a cabo con aparente tranquilidad los días 15 y 16 del mismo mes.

Los mencionados facciosos, Domingo de la Canal y Francisco Ugarte, pronto volvieron a destacar, porque fueron elegidos como prior y cónsul en 1716 y en estas funciones prepararon, junto con el segundo cónsul, Nicolás de Eguirra, las elecciones de 1718. Cuando el 7 de enero de ese mismo año, se llamó a la elección de los electores sin la elaboración previa de una nueva matrícula, se presentó tanta gente que se decidió hacer una calificación espontánea. Ésta se realizó en circunstancias bastante caóticas. Nuevamente hubo una gran discordia sobre si los flotistas y forasteros debían votar o no. A este respecto, el juez de alzadas, Antonio de Terreros y Ochoa, el prior y los cónsules decidieron que a falta de ley correspondiente votaran vecinos, forasteros y flotistas indistintamente. Entre mutuas acusaciones, finalmente se nombraron calificadores para poner orden en la votación. A uno de ellos lo eligió el juez de alzadas, otros dos fueron elegidos por los líderes del Consulado y dos más nombrados por “el cuerpo de comerciantes”, quienes desconfiaban de la imparcialidad de la gente propuesta por el prior y los cónsules.¹³ Entre mutuos reproches y reclamaciones por que se suspendiese la elección, el juez de alzadas insistió en cumplir con el horario prescrito por las ordenanzas. Así, la calificación empezó sin que uno de los calificadores nombrados por los comerciantes hubiese llegado y el otro se retiró durante el proceso, en protesta contra el modo de proceder. Pero la calificación terminó formalmente y se eligió a los electores.

La pelea no terminó aquí, pues las partes empezaron a urgir al virrey marqués de Valero a que ordenase repetir la matrícula, como había ocurrido en 1712.¹⁴ El marqués suspendió temporalmente el proceso electoral, a lo que siguieron las protestas del bando contrario,

¹² Decreto del virrey, México, 11 de enero de 1712, *ibid.*, f. 33r-38r.

¹³ Petición de Diego de Zavallos Villegas, Juan Luis de Baeza, Joaquín de Zavaleta y otros, México, s. f. [8 de enero de 1718], AGI, Méx. 742. Petición de los electores y comerciantes, México, s. f. [10 de enero de 1718], *ibid.*

¹⁴ Petición de Diego de Zavallos Villegas, Juan Luis de Baeza, Joaquín de Zavaleta y otros [20 firmas], México, s. f. [8 de enero de 1718], *ibid.*

que exigía que se reconociese tanto a la matrícula como a los electores y se procediese a la elección del prior y cónsul.¹⁵ Sin embargo, después de recurrir al consejo de los juristas de la Audiencia, el virrey suspendió la elección del todo, ordenando que los autoridades en función continuaran en sus cargos hasta 1719.¹⁶ Aunque con esta medida parece que el Consulado pudo desempeñar sus funciones de manera ordenada en lo que quedaba del año, los interesados siguieron defendiendo sus posiciones, llevándolas hasta las instancias de la metrópoli. Pero no lograrían decisión alguna sino hasta las elecciones de 1721.

Lo que no queda muy claro es la naturaleza de las fracciones que se formaron en esta ocasión. Los partidos de vascongados y montañeses todavía no figuraban oficialmente. Parece que el prior y los cónsules en funciones en 1717 representaban, más que a un partido étnico, a una cierta élite comercial, a la que otros no querían conceder el liderazgo permanente. A primera vista, parece que prevalecían los vascongados entre los adversarios de la elección realizada y el Consejo de Indias creía poder identificar como su líder a Joaquín de Zavaleta,¹⁷ aunque entre ellos figuraba también Juan Luis de Baeza, el que acaso fuera descendiente de la familia Baeza de origen converso, que ya ocupaba un papel predominante en el comercio novohispano a principios del siglo XVII,¹⁸ y que en 1733 se encontraría al lado de los montañeses. Junto con el viejo prior Domingo de la Canal (cuyo apellido tampoco suena nada vasco), Baeza fue señalado por la fracción vencida como el responsable de toda la pelea. Se dijo que pretendía continuar el priorato por tercer año, después de que ya su padre, Juan Luis de Baeza, había ejercido esta función en 1714 y 1715.¹⁹ Entre los defensores del proceso prevalecían los montañeses, encabezados por el marqués de Altamira, pero también aparece el destacado guipuzcoano Juan Esteban de Yturbide. De todas formas, se conformaron dos grupos claramente identificables: todavía no se definían a sí mismos étni-

¹⁵ Petición del los electores y comerciantes [50 firmas], México, s. f. [10 de enero de 1718], *ibíd.*

¹⁶ Junta del Real Acuerdo, México, 17 de abril de 1718, *ibíd.* Decreto del virrey marqués de Valero, México, 17 de abril de 1718, AGNM, AHH, leg. 215, f. 407r-408v.

¹⁷ Parecer del fiscal, Madrid, 29 de noviembre de 1719, AGI, Méx. 742.

¹⁸ Compárese Hoberman (1991: 43).

¹⁹ Petición de los electores y comerciantes, México, s. f. [10 de enero de 1718], AGI, Méx. 742.

camente, pero al parecer se consolidaban para más tarde convertirse en los partidos de los montañeses y vizcaínos.

Uno de los resultados inmediatos del disturbio de 1718 fue que, a partir de 1719, se elaboró una nueva matrícula para cada bienio, sin que las peleas por esto cesaran. En ese año, la elección tuvo por primera vez un matiz completamente “étnico”, ya que fueron elegidos como prior, Juan Bautista de Arozqueta, como cónsul moderno, Bernardo de Marriátegui y como cónsul antiguo, siguió en función, por tercer año, Nicolás de Eguiara y Eguren. Como la demanda de 1718 por el despojo de los electores de su derecho de elegir, había quedado en suspenso, estas elecciones y las de 1720 se realizaron bajo la protesta de un grupo. Ante tal situación, el Consulado, que se encontraba en manos de la otra fracción, intentó conseguir la confirmación real “mediante los precisos suplementos de más de cien mil pesos que nos ha manifestado necesitar dicho virrey”.²⁰ Pero esto no fue definitivo; el Consejo de Indias reprobó las medidas tomadas por el virrey en 1718, si bien la real cédula que ordenaba la reinstitución de los electores de aquel año llegó a México después de haberse realizado la elección de 1719. También esta decisión fue enseguida apelada. Mas la metrópoli persistía en su decisión, aunque el Consulado de Cádiz apoyaba a los vascos de México,²¹ y para la elección de 1721 fue forzoso dar el voto a los electores de 1718.

En consecuencia, para 1721 fueron elegidos personajes del bando de los montañeses, Juan del Castillo como prior y Juan Pérez de Albornoz como cónsul. La fortuna quiso, sin embargo, que el nuevo prior falleciera en mayo del año siguiente. Según las reglas del Consulado, su antecesor debía suplir su ausencia por el resto del periodo, así que el vasco Juan Bautista de Arozqueta terminó gobernando los últimos seis meses del bienio montañés.²²

La elección de 1723 se abrió otra vez con una protesta contra la votación de los forasteros, señalando que se habían excluido de la

²⁰ Juan Bautista de Arozqueta, prior, y Nicolás de Eguiara y Bernardo de Marriátegui, cónsules, al rey, México, 2 de abril de 1719, *ibíd.*

²¹ Consejo de Indias al rey, Madrid, 13 de julio de 1720, *ibíd.*

²² Junta para substitución de prior en lugar y por muerte de Juan del Castillo, México, 27 de mayo de 1722, AGNM, Cons. 268, exp. 2, f. 93v-94r.

elección del Consulado de Lima;²³ pero el oidor Gregorio Carrillo determinó, interpretando las leyes, que “se comprehenden en la jurisdicción del Tribunal del Consulado, no sólo los vecinos y mercaderes de la ciudad de México, sino también todos los de la Nueva España y sus provincias, como son el nuevo reino de Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatán y Soconusco y los que tratan en los reinos de Castilla”.²⁴ Todo esto era solamente el principio de una nueva querella sobre la matrícula, de la que se intentó excluir a varios vascos conocidos. Pero esta vez parece que se llegó a un acuerdo y salieron elegidos: como prior, el vasco Francisco de Ugarte, y como cónsul, el montañés Francisco Franco Soto.

En 1725 y 1726 las elecciones se desarrollaron con los mismos tipos de riñas durante la calificación y terminaron con la clara victoria de los montañeses.

En 1727 la batalla electoral llegó a su clímax. Bajo la vigilancia del oidor y juez de alzadas vasco, José Francisco de Aguirre, la disputa empezó cuando éste, el prior y los cónsules nombraron a los calificadores para la matrícula.²⁵ Aunque con Miguel de Amazorraín, Francisco de Fagoaga, Francisco Franco Soto y Francisco Antonio Sánchez de Tagle quedaron nombrados dos destacados miembros de cada uno de los dos bandos, el grupo vasco no reconoció este procedimiento, ya que argumentaba que la elección de los calificadores correspondía a la Junta de Comercio y no a los funcionarios del Consulado. Por lo tanto, Amazorraín y Fagoaga se disculparon de ejercer su función.²⁶ Harto de las querellas de este tipo, el virrey encargó al juez de alzadas realizar la matrícula de todas formas. Ésta se efectuó entre el 4 y el 8 de enero, ahora ante las protestas del grupo montañés, y se calificaron un total de 671 comerciantes.²⁷ En la elección de los electores del 11 de enero, del total de matriculados votaron 667 personas. De las papeletas en la urna se invalidó un voto, porque no contenía una lista de electores, sino que era la carta de un tal Felipe Villar a Pedro Te-

²³ Representación de Juan Bautista López, el conde del Fresno de la Fuente y otros, México, 5 de enero de 1723, *ibid.*, f. 106r-107r.

²⁴ Parecer del oidor Gregorio Carrillo, México, 5 de enero de 1723, *ibid.*, f. 108r-108v.

²⁵ Nombramiento de calificadores, México, 2 de enero de 1727, *ibid.*, f. 175r-175v.

²⁶ Representación de Juan Bautista de Arosqueta, Francisco de Ugarte y otros al virrey, México, s. f., *ibid.*, f. 183r-184v.

²⁷ Matrículas, México, 4-8 de enero de 1727, *ibid.*, f. 187v-195v.

rán. Los 666 votos restantes se distribuyeron en partes iguales, es decir, cada lista gozaba de 333 votos. Frente a este empate, el juez de alzadas aprovechó su derecho de señalar al ganador, y Aguirre se decidió en favor de sus paisanos vascos.²⁸

El grupo montañés se sintió engañado con esta decisión, después de haber creído contar con la mayoría de los votos en la matrícula. Pero los cinco matriculados que no votaron le dieron un vuelco a tal expectativa. De los cinco ausentes, dos no votaban por enfermedad, pero los otros tres eran votos montañeses y hubieran decidido la elección. En cuanto al voto invalidado, Pedro de Terán argumentó que tenía la papeleta con la lista de electores en la bolsa, pero que en el momento de la elección se había equivocado, depositando en la urna otro papel del mismo tamaño, la carta mencionada. Pedía se le permitiera repetir su voto, pero el licenciado Aguirre se negó. Los otros dos votos hubieran sido de Nicolás Fernández de la Cavada y de Juan de Mixares. No se habían presentado a la elección y los líderes de los montañeses afirmaron que se hallaban encerrados en la casa del almacenero vasco Francisco de Echeveste. Pero Aguirre se negó a averiguarlo.²⁹

Como era de esperarse, los montañeses reaccionaron con una protesta inmediata contra la decisión del juez de alzadas. No obstante, la Audiencia y el virrey aprobaron la actuación del oidor³⁰ y dos días después quedaron elegidos: como prior Miguel de Amazorraín, como cónsul Domingo Mateos y como diputados Juan Bautista de Arozqueta, Francisco de Ugarte, Juan Esteban de Yturbide, Rodrigo de Lucio y Carrera y Francisco de Urtusástegui.³¹ Era el triunfo vasco total. Las reclamaciones, naturalmente, seguían acentuando los puntos del voto invalidado y de los dos montañeses supuestamente encerrados.

Aunque todas las protestas fueron denegadas, las acusaciones sí se investigaban, sobre todo la hecha contra Francisco de Echeveste, según la cual había encerrado en su casa a dos montañeses para impedir

²⁸ Elección de electores, México, 11 de enero de 1727, *ibid.*, f. 203v, 205r-206v.

²⁹ Representación de Francisco Franco Soto, Juan de Angulo y otros al virrey marqués de Casafuerte, México, 13 de enero de 1727, AGI, Escribanía 205B, pieza 30, f. 1v-4r.

³⁰ Dictamen del Real Acuerdo, México, 11 de enero de 1727, AGNM, Cons. 268, exp. 2, f. 206r-207r.

³¹ Elección de prior, cónsul y diputados, México, 13 de enero de 1727, *ibid.*, sin fol.

que votaran. Resumiendo las diversas declaraciones tomadas, resulta el siguiente cuadro: Nicolás Fernández de la Cavada y Juan de Mijares, dos jóvenes comerciantes de Manila, vivían hospedados en casa del igualmente joven Francisco de Echeveste, que era también su aviador. Ya un mes antes de la votación, integrantes de las dos parcialidades recorrieron la ciudad buscando votos para su causa. Los dos montañeses se encontraban en un dilema, pues por su origen tendrían que votar en favor del grupo montañés y por la hospitalidad y dependencia económica de su anfitrión, en favor de los vascos. El día anterior a la elección, el grupo montañés les envió un papel a cada uno de ellos con la lista de sus electores, el cual serviría como papeleta de voto para el día siguiente. Echeveste, que antes les había insistido en que se matriculasen, les dio también la papeleta vasca; pero, cuando los dos le aseguraron que iban a usarla en la elección, éste les aconsejó que lo mejor sería que se quedasen en casa y así no ofenderían a nadie. Sugerencia bastante astuta, porque así se aseguraba de que los dos en la elección secreta no echarían la lista de sus paisanos a pesar de sus promesas. Fernández de la Cavada y Mijares consintieron en esta propuesta y no votaron, aunque los montañeses llegaron incluso a buscarlos.³² Pero Fernández de la Cavada declaró “que no le podía faltar al dicho general Echeveste, pues lo necesitaba para otras cosas y que sólo llevándolo forzado iría, pero sin asegurarles ni expresarles por quién votar en semejante caso” y se fue a una casa de juegos.³³ Mijares, por su parte, argumentó algo similar y se dirigió en su caballo a la basílica de Guadalupe, y cuando un renombrado paisano le expresaba su asombro que se dejara manipular de tal manera, le replicó: “¿Qué quiere usted que yo haga a eso, si ninguno habrá que me dé diez o doce mil pesos como el general don Francisco Echeveste para

³² Declaración del general Francisco de Echeveste, México, 1 de marzo de 1727, AGI, Escribanía 205B, pieza 30, f. 13v-16r.

³³ Declaración de Nicolás Fernández de la Cavada, México, 8 de marzo de 1727, *ibid.*, f. 21v-23r. A otros les contaba que “el haber consentido en la detención fue atendiendo a que dicho general Echeveste no escribiese a un tío que tiene en las Islas Filipinas de que pudiera nacer la quiebra con él y perder su gracia”; Declaración de Antonio Barreda Lainez, México, 14 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 49r. “[...] que tenía fiados ocho o diez mil pesos en cabeza de dicho general, de que se le podía seguir la vejación de no percebirlos a tiempo para poder llevarlos a China”; Declaración de Julián Gutiérrez de Palacios, México, 14 de mayo de 1727; *ibid.*, f. 50v.

pasar a Filipinas?”³⁴ Otros testigos, sin embargo, agregaron algunos detalles más. Por ejemplo, declaraban que Fernández de la Cavada había pedido cuatro boletas de voto de los montañeses, para él y su compañero, para que le pudieran entregar dos a Echeveste y demostrarle que iban a votar a favor de los vizcaínos y más tarde depositar en la urna las dos papeletas restantes a favor de sus paisanos.³⁵ Tal intención, sin embargo, Echeveste la había truncado con su propuesta de abstenerse a votar. Los dos montañeses contaban, además, que habían consentido en hacer lo que Echeveste proponía, ya que se oía en la ciudad que sus paisanos estaban bien adelantados en la matrícula, y que por lo tanto consideraban su voto superfluo.³⁶ Al mismo tiempo, al menos Fernández de la Cavada manifestaba un exaltado patriotismo: “porque en materia de punto había de privilegiar a su nación, con circunstancia, que si su padre fuera vizcaíno y él nacido, como es, en las Montañas, faltara a los debidos respetos de padre por su patria”.³⁷ La presión que se ejercía sobre ellos por todos lados ciertamente no era poca. Así que a Fernández de la Cavada se le citó a la casa de un sobrino del líder montañés, Gaspar de Alvarado, para interrogarle sobre su comportamiento.³⁸

Como siempre, un montón de papeles cruzaron el Atlántico y ocuparon al Consejo de Indias, mientras que en México el Consulado seguía sus tareas. Para resolver la situación, el Consulado efectuó una junta el 28 de mayo de 1727, en la que participaron los líderes de ambos grupos y volvieron a solicitar que el rey limitase el derecho a votar a los almaceneros de la ciudad de México y se excluyesen igualmente “personas de esta ciudad que tengan tienda pública por cuantio-

³⁴ Declaración de Francisco de la Cotería Salmón, México, 14 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 48v; Declaración de Juan Antonio de Mijares, México, 8 de marzo de 1727, *ibid.*, f. 23r-26r.

³⁵ Declaración de Antonio Barrera Lainez, México, 14 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 45v-47r; Declaración de Nicolás de Azoñes Palacios, México, 16 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 59r.

³⁶ Declaración de Miguel Ramírez de Leiba, México, 16 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 52v.

³⁷ Declaración de Miguel Ramírez de Leiba, México, 16 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 53v. “[...] aunque [...] debían finezas al general Echeveste, [...] llegando estos casos no se miraba más que al punto después de Dios”; Declaración de Nicolás de Azoñes Palacios, México, 16 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 59v-60r.

³⁸ Declaración de Miguel Ramírez de Leiba, México, 16 de mayo de 1727, *ibid.*, f. 52r.

sa que sea, ni con el título de encomiendas”.³⁹ Esta vez lograron su propósito y la Corona, interesada en la tranquilidad social y el puntual pago de las alcabalas arrendadas por el Consulado, ordenó con real cédula del 19 de enero de 1728 lo que los almaceneros habían pedido.⁴⁰ La puesta en práctica de este nuevo reglamento dejó también instituidos oficialmente a los dos partidos, ya que la Audiencia y el virrey ordenaban que, como calificadores para la matrícula, “se nombren por cada partido dos personas”.⁴¹

En 1729 se eligió por primera vez con los forasteros excluidos. Aun así, la matrícula se llevó a cabo de manera bastante reñida, y acto seguido de que la primera figura del grupo montañés, Francisco Antonio Sánchez de Tagle, ganara el priorato, el grupo vasco protestó por el resultado.⁴² Hay que recordar que todavía no se había decidido nada en Madrid sobre la protesta montañesa por las elecciones del bienio de 1727/28, a la que ahora se añadía la protesta vasca contra la elección de 1729/30.

En México, las elecciones consulares de los siguientes años se caracterizarían por el tenaz esfuerzo de ambos partidos por demostrar que sus partidarios eran de hecho almaceneros, sin tienda pública, y que al menos parte de los otros no lo eran. Esto arroja mucha información sobre los comerciantes en cuestión, pero no se puede entrar aquí en detalles.⁴³ En 1731, los vascos entraron a la contienda únicamente bajo protesta, porque no reconocían como legítimos al prior y los cón-

³⁹ Junta del Consulado, México, 28 de mayo de 1727, AGI, Escribanía 205B, pieza 27, f. 9v-11v.

⁴⁰ Real cédula, El Pardo, 19 de enero de 1728, AGNM, Cons. 268, exp. 4, f. 1r-4v. En este momento, el Consulado tenía arrendado el cobro de las alcabalas de la ciudad de México por 280.000 pesos anuales durante 15 años. La real cédula subrayaba que todavía restaban por cubrir once años y medio y que eran los electores “los fiadores de dicha renta”. Por lo tanto, no se quería arriesgar el cumplimiento del contrato debido a los desórdenes electorales.

⁴¹ Auto del Real Acuerdo, México, 20 de diciembre 1728, *ibíd.*, f. 5v-7r.

⁴² Véanse los respectivos poderes en AGI, Escribanía 205A, pieza 21, f. 11r-15r, y pieza 27, f. 107r-112r.

⁴³ Véase por ejemplo AGI, Escribanía 205B, pieza 28, f. 1r-41v (9 de septiembre – 5 de noviembre de 1729).

sules y diputados del momento.⁴⁴ La victoria montañesa se repitió, seguida de la protesta de los vascos.⁴⁵

En mayo de 1732, Madrid tomó una decisión al respecto. Primero, ordenó que el oidor Juan de Oliván y Rebolledo, juez de alzadas de 1729, cuyo desempeño fue fuertemente criticado por los dos partidos, no participase nunca más en una elección. Oliván y Rebolledo era criollo y no gozaba de buenas relaciones con los españoles peninsulares.⁴⁶ Frente a él, vascos y montañeses, por lo tanto, guardaban las mismas reservas.⁴⁷ Poco después, se envió una real cédula en la que se prescribía que, en el futuro, cada partido debía presentar una lista de las personas consideradas aptas para la elección. Sobre los casos dudosos, es decir los nombres que no aparecieran en ambas listas, tenía que dictaminar el juez de alzadas y decidir definitivamente el virrey. Sobre esta decisión ya no se podían aceptar protestas o apelaciones.⁴⁸ Las elecciones de 1729/30 y las de 1731/32 fueron declaradas nulas, tal y como lo había solicitado el partido vasco.⁴⁹

Las elecciones de enero de 1733 se organizaron según estas nuevas reglas. Como quedaron nulificadas las últimas elecciones, ese año había de elegirse no solamente al cónsul moderno, sino a dos cónsules, de los cuales el primero sólo iba a estar en funciones durante un año.⁵⁰ La nueva calificación se efectuó con las mismas disputas de siempre. Los vizcaínos impugnaron 14 nombres de los montañeses, mientras que éstos objetaron 31 de los vizcaínos, advirtiendo que si los vascos impugnados se aceptaban, ellos sumarían a su propuesta

⁴⁴ Representación de Tomás de Sigüenza y Góngora, México, 2 de enero de 1731, AGNM, Cons. 268, exp. 4, f. 48r-49r.

⁴⁵ Representación de Tomás de Sigüenza y Góngora, México, 13 de enero de 1731, *ibid.*, f. 74r.

⁴⁶ Véase, por ejemplo, su larga pelea con la élite peninsular durante casi todos los años veinte relativa a si se podía condenar a trabajos forzados a delincuentes españoles; Expediente sobre si los montañeses españoles que cometen delitos en las Indias deben ser condenados en la pena de obras, AGI, Méx. 673; también en AGI, Méx. 674.

⁴⁷ El rey al virrey marqués de Casafuerte, Madrid, 7 de mayo de 1732, AGI, Méx. 742.

⁴⁸ Real cédula, Sevilla, 28 de mayo de 1732, AGNM, Cons. 268, exp. 4, f. 86r-88v.

⁴⁹ Real cédula, Sevilla, 20 de junio de 1732, AGI, Escribanía 205A, pieza 14, f. 1r-4v.

⁵⁰ Parecer del fiscal, el licenciado Palacios, México, 29 de noviembre de 1732, AGNM, Cons. 268, exp. 4, f. 102v-104v.

para la matrícula una lista adicional ya preparada.⁵¹ Inclusive sobre el juez de alzadas, José Francisco de Aguirre, que había dirigido la elección de 1727, expresaban su desconfianza por su origen vasco.⁵² Por su parte, los vascos, que no sabían cómo iba a resultar el nuevo procedimiento, adelantaron una protesta formal y preventiva a cualquier resultado adverso del comicio.⁵³ Pero salió elegido como prior el vasco Francisco de Fagoaga, por lo que esta vez fueron los montañeses quienes inmediatamente después de que se había dado el resultado iniciaron los trámites para la nulificación del comicio, que les estaba costando el predominio ejercido en los últimos años y un cónsul después de un solo año, puesto que en esta ocasión el cónsul moderno elegido en el año anterior no pasaba a ser cónsul antiguo, sino se elegían ambos de nueva cuenta.⁵⁴ Los vascos eligieron como nuevo cónsul al montañés Pedro Ruiz de Castañeda, pero los paisanos de éste argumentaron que se trataba sólo de una farsa, pues el elegido estaba demasiado viejo y enfermo para ejercer tal función. De hecho, Ruiz de Castañeda no aceptó el cargo por razones de salud, y los electores lo reemplazaron por el vizcaíno Sebastián de Aziburu y Arechaga.⁵⁵

Los montañeses enviaron a Madrid estos argumentos señalando, para dar más peso a su solicitud, que su partido, “por sus mayores caudales”, daba también mayores utilidades a la Corona.⁵⁶ En la metrópoli parece que se produjo cierta desesperación debido a los perpetuos recursos. De esta manera, se aconsejó al virrey desestimar sistemáticamente las protestas en el futuro, con la esperanza de que así el problema se solucionaría por sí mismo, “pues así que lo experimenta-

⁵¹ Representación de Francisco Antonio Sánchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, México, s. f. [3 de enero de 1733], AGI, Escribanía 205B, pieza 25, f. 13r-16r.

⁵² Representación de Francisco Antonio Sánchez de Tagle y Gaspar de Alvarado México, 4 de enero de 1733, *ibíd.*, f. 16r-17v

⁵³ Juan Esteban de Yturbe y otros al licenciado José Francisco de Aguirre, México, 2 de enero de 1733, AGI, Escribanía 205A, pieza A, f. 1v-2v.

⁵⁴ Contradicción de Francisco Antonio Sánchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, México, s. f. [10 de enero de 1733], AGNM, Cons. 268, exp. 3, f. 78r-78v. Poder otorgado por el partido de los montañeses, México, 14 de enero de 1733, AGNCM, FA, Notaría 73, Juan Francisco Benítez Trigueros, vol. 508, f. 15r-17r.

⁵⁵ Elección de cónsul segundo, México, 9 de enero de 1733, AGNM, Cons. 268, exp. 4, f. 131r-133r.

⁵⁶ Representación de Lucas de Miranda, s.l. s. f. [mayo de 1733], AGI, Escribanía 205A, pieza A, f. 40r-40v.

sen se concordarían entre sí en lo venidero porque de lo contrario sería un pleito interminable”.⁵⁷

En 1735 los dos partidos no se habían puesto de acuerdo entre sí, y se inició la acostumbrada riña sobre la matrícula y la elección de los electores. La matrícula definitiva y aprobada por el virrey-arzobispo, Juan Antonio de Vizarrón, fue impugnada por el partido montañés y el virrey rechazó la protesta.⁵⁸ Se repitió el triunfo de los vizcaínos y la apelación de los montañeses a la elección. Esta vez el virrey, obedeciendo a la cédula del 23 de mayo de 1734, se negó a entregar a las partes incluso los testimonios del proceso electoral.⁵⁹ Mientras tanto, un destacado montañés, el coronel Juan Gutiérrez Rubín de Celis, fue nombrado corregidor de la ciudad de México; y en consecuencia sus paisanos obtuvieron de él por lo menos un testimonio autorizado de todos los papeles originales que estaban en su poder, con los cuales intentaban documentar su apelación.⁶⁰ En la nueva representación ante el Consejo de Indias, el apoderado de los montañeses no olvidó señalar expresamente el origen vasco del arzobispo-*virrey* Vizarrón y además repitió los argumentos de siempre.⁶¹ Por su parte, el apoderado de los vascos no se dio prisa en contestar las acusaciones y echó mano de una serie de maniobras jurídicas, alegando que su poder únicamente se refería a las protestas pasadas, probablemente para ganar tiempo y posibilitar que las elecciones de 1737 se realizaran antes de que una decisión de la Corona llegase a México.⁶² De hecho, la Corona no llegó a resolver nada definitivo, sino que se limitó a pedir al

⁵⁷ Real cédula, Aránjuez, 23 de mayo de 1734, AGI, Méx. 742.

⁵⁸ Petición de Juan de Angulo y Agustín de Iglesias Cotillo, México, 7 de enero de 1735, AGI, Escribanía 205A, pieza 12, f. 14r-15v. Decreto del virrey-arzobispo Juan Antonio de Vizarrón, México, 7 de enero de 1735, *ibíd.*, f. 15v.

⁵⁹ Decretos del virrey-arzobispo Juan Antonio de Vizarrón, México, 9 de febrero y 14 de marzo de 1735, AGI, Escribanía 205A, pieza 12, f. 20r, y pieza 17, f. 95r-95v.

⁶⁰ Decreto del corregidor Juan Gutiérrez Rubín de Celis, México, 18 de abril de 1735, AGI, Escribanía 205A, pieza 12, f. 2r-2v.

⁶¹ Representación de Lucas de Miranda, Madrid, s. f. [octubre de 1735?], AGI, Escribanía 205A, pieza 2, f. 36r-42v.

⁶² Representaciones de Lucas de Miranda, Madrid, s. f. [febrero de 1736 y marzo de 1736?], AGI, Escribanía 205A, pieza A, f. 63r, f. 64r-64v y f. 65r-65v.

virrey que otorgara a las partes toda la documentación exigida sobre las elecciones de 1733 y 1735 para poder seguir el caso.⁶³

Así, en 1737, después de que la matrícula fuera nuevamente reconvenida con vehemencia por los montañeses y de que los vizcaínos habían vuelto a asegurarse una rotunda victoria en las elecciones, continuaron los viejos pleitos sobre las elecciones de 1733/34 y 1735/36, iniciándose una nueva querrela sobre la última votación. El virrey seguía poniendo trabas a los montañeses respecto a los testimonios exigidos, los que nunca les fueron entregados en su totalidad.⁶⁴ Así que tampoco este pleito se resolvió y en 1739 empezó el mismo juego y volvieron ganar los vascos.

En abril de 1740, por fin, el Consejo de Indias decidió aprobar las elecciones de electores de 1733, 1735 y 1737. Al mismo tiempo, se ordenó respetar la real cédula del 28 de mayo de 1732, la cual reservaba al virrey la facultad de tomar la última decisión sobre la calificación de los comerciantes, limitando sin embargo este derecho a las personas puestas en duda, es decir, a los comerciantes sobre los cuales los calificadores de los partidos no se ponían de acuerdo. De ninguna manera el virrey debía excluir o aceptar a personas a quienes “los mismos calificadores y juez de alzadas, hubiesen uniformemente admitido o excluido”, como había acontecido en el pasado.⁶⁵ Sin embargo, en Madrid las autoridades se preocupaban por la continua supremacía de los vascongados, ya que el grupo de los montañeses aportaba no menos que ellos al rendimiento fiscal de la colonia. Por lo tanto, había que evitar “enconos y diferencias entre dos partidos tan fuertes que podrían algún día causar turbación grave y más en parajes tan distantes”. Las cosas no podían seguir así, sino que exigían una reforma.⁶⁶ De esta manera, el fiscal del Consejo recomendó en junio de 1740 introducir una “alternativa” que permitiera a los dos grupos participar en la misma proporción en la administración del Consulado, para cuya

⁶³ Real cédula, San Ildefonso 4 de agosto de 1736, AGI, Escribanía 205A, pieza 6, f. 1r-6r.

⁶⁴ Decretos, México, 1 y 9 de abril de 1737, *ibid.*, f. 23v-24r y f. 28v.

⁶⁵ El Consejo de Indias, Madrid, 29 de abril de 1740, AGI, Escribanía 205A, pieza A, f. 176r-177r.

⁶⁶ El marqués de la Regalía a Miguel de Villanueva, Madrid, 29 de abril de 1740, AGI, Méx. 742.

adecuada introducción el nuevo virrey, el duque de la Conquista, debía reunir la información necesaria.⁶⁷

La realización de tal proyecto se demoró, en parte por la prematura muerte del duque de la Conquista. Entretanto, en 1741, la matrícula y la elección —como ya era costumbre— habían culminado con el triunfo absoluto del partido vasco, y la Corona aprobó todas las elecciones desde 1733 a 1739, inclusive.⁶⁸ Pero esta iba a ser la última decisión según el viejo estilo y en 1743 entraría en vigor un nuevo régimen.

3. El nuevo reglamento electoral y la institucionalización de los partidos de vascongados y montañeses

Después de tanta polémica, la Corona, que al parecer no quería tomar partido, merenciéndole “igual amor y benevolencia los vizcaínos y montañeses a quienes miro como vasallos de mayor fidelidad”, decidió establecer la alternativa entre las dos parcialidades.⁶⁹

En el bosquejo adjunto a las instrucciones al virrey conde de Fuenclara se establecían las líneas rectoras de un nuevo arreglo.⁷⁰ Se preveía que se eligieran, como antes, entre los almaceneros a 30 electores, pero con la novedad de que 15 debían ser de un bando y 15 del otro, o sea que los electores ya no se elegirían en votación abierta, sino en un proceso interno de los grupos. Posteriormente, uno de los dos grupos elegiría al prior (y lo reeligiría al año siguiente) y el otro a un cónsul moderno tanto en el primero como en el segundo año; y en el bienio siguiente se alternaría esta disposición. Para empezar, sólo se iba a elegir un prior por un solo año, pero en el futuro esta función y la de los cónsules volvería a ser por dos años. Los cinco diputados se elegirían en el primer año, tres de un partido y dos del otro, y en el segundo al revés. Se advertía expresamente “que los priores, cónsules, electores y diputados no han de ser sólo vizcaínos y montañeses, sino de éstos y de los otros sujetos de las provincias de España e Indias que

⁶⁷ Respuesta del fiscal, Madrid, 3 de junio de 1740, *ibid.*

⁶⁸ Real cédula, Aranjuez, 7 de mayo de 1741, *ibid.*

⁶⁹ Instrucción secreta al virrey conde de Fuenclara, §18, Aranjuez, 23 de abril de 1742, AGI, Méx. 1505.

⁷⁰ Modo en que podrán arreglarse las elecciones de prior y cónsules de México que se celebran cada dos años entre los dos partidos de vizcaínos y montañeses para establecer la alternativa, AGNM, General de parte 70, f. 166v-167v (también AGI, Méx. 1505)

siguen sus respectivos partidos, siendo a propósito para ello". Pero con esto quedaba establecido que, independientemente del origen que fueran los diferentes comerciantes, se tenían que incorporar a uno de los dos grupos. El documento terminaba con una exhortación al celo y la razón de los líderes de los grupos, Francisco Antonio Sánchez de Tagle y Juan Gutiérrez Rubín de Celis, por un lado, y Domingo Mateos y Sebastián de Aziburo y Arechaga, por el otro lado, con el fin de que aprovecharan la posibilidad para establecer la paz dentro del Consulado.

Por esta razón, a principios de noviembre de 1742, el virrey le ordenó a Francisco Antonio Sánchez de Tagle, como el más viejo de ellos, invitar a los otros a discutir la introducción del nuevo arreglo y darle su parecer. Se propusieron 13 puntos para la realización práctica del nuevo procedimiento, los que se debían obedecer después de la calificación de los votantes. Aunque en la matrícula se procedía en teoría de acuerdo a la vieja manera, ésta había perdido casi por completo su importancia, ya que únicamente definía al grupo del cual los dos partidos podían elegir sus quince electores, pero ya no influía de ninguna manera en la competencia de las dos partes y por lo tanto tampoco fue objetada. Los 13 puntos propuestos prescribían que la elección de los 15 electores fuera al interior de cada grupo, y que éstos finalmente propondrían también al prior y al cónsul. Sin embargo, insistían en un toque de democracia, subrayando que los 30 electores tenían derecho a votar por quien les pareciera, siempre que dicha elección recayese en la parcialidad en turno, independientemente de que cada grupo hiciera una propuesta oficial para las funciones que le correspondían. También subrayaban que la reelección del prior en su segundo año no tenía que ser automática, sino que cada partido tenía el derecho de cambiar a su candidato para el segundo año.⁷¹

Ahora sólo restaba poner en vigor el nuevo juego, así que el virrey sorteó el primer priorato y lo ganaron los vizcaínos.⁷² Con esto empezó una nueva época en la historia electoral del Consulado, ciertamente menos democrática, pero más acorde con la estructura clientelista de la economía y de la sociedad colonial, y con esto la vida se volvió más

⁷¹ Sentir de los priores, México, 15 de diciembre de 1742, AGNM, General de parte 70, f. 167v-170r.

⁷² México, 22 de diciembre de 1742, AGNM, General de parte 70, f. 170r-170v.

tranquila. Esto se logró, tal vez, porque las elecciones, que a principios del siglo eran bastante abiertas, en su nueva forma definitivamente se inscribían en los parámetros de las elecciones de tipo de Antiguo Régimen. Como era característico para “la asambleas electorales de los cuerpos y comunidades antiguos, la elección propiamente dicha no era más que la última fase, y quizá la menos importante, de la reunión del grupo: la que materializaba el acuerdo al que se había llegado antes por discusión y compromiso” (Guerra 1999: 54). Para el afianzamiento de estos principios, la exclusión de los forasteros y la organización de la matrícula obligatoria habían sido los primeros pasos y con la introducción de la alternativa el proceso encontró su consumación.

4. Balance

Las peleas descritas se desarrollaban en el contexto de otras disputas que para la fortuna del comercio mexicano tenían mucha más importancia que la victoria de los montañeses o de los vizcaínos. Un asunto central, por ejemplo, era el arrendamiento de la alcabala, con el que los comerciantes, a través del Consulado, controlaron desde el siglo XVII y hasta 1754 la fiscalización de sus propios negocios. Otro tema de gran peso se centraba en la fuerte competencia triangular entre el comercio mexicano, filipino y andaluz sobre el control de los circuitos mercantiles transpacífico, interno novohispano y transatlántico. Para entender las pugnas internas del Consulado, me parece oportuno contextualizarlas en estas controversias. Aunque no puedo todavía profundizar mucho en este sentido, quiero señalar algunos puntos a manera de hipótesis.

- i) Ubicar las pugnas electorales en el tejido de las relaciones del comercio novohispano con las diferentes esferas del Estado sería probablemente más esclarecedor en cuanto a la posición de la Corona frente a la formación de los partidos étnicos. En la querella sobre el comercio colonial, la Corona borbónica perseguía reformar la relación con América en provecho de los intereses europeos. Por lo tanto, tenía cierto interés en debilitar al Consulado mexicano. Ello tal vez pueda explicar el largo periodo de indecisión frente a las confrontaciones internas de los comerciantes. No pretendo decir que la Corona no buscara deliberadamente ningún

arreglo duradero a las elecciones. Pero es probable que no se mostrara muy preocupada por el hecho de que la élite comercial novohispana se peleara entre sí. Sobre todo en los años veinte y treinta éste pudo ser el caso, ya que se quería excluir, en aquel entonces, a los mercaderes mexicanos del comercio filipino y al mismo tiempo establecer de nuevo el sistema de flotas, limitar el contrabando y suprimir el comercio inglés, legalizado como consecuencia de la Guerra de Sucesión. Cuando estos propósitos se habían establecido, la Corona concedió a los almaceneros de la ciudad de México la gracia de excluir a los forasteros y flotistas de su Consulado, fortaleciendo de esta manera su dominio sobre los circuitos internos (Pérez Herrero 1983).

Ciertamente, en Madrid tampoco se tenía ningún interés en dismantelar el gremio del comercio. La Corona lo necesitaba para organizar el dinero para la Real Hacienda, tanto en su función como arrendatario de las alcabalas como para exigirles donativos y préstamos forzosos.⁷³ Además, la Corona siempre procuraba antes que nada la paz social y política, pero estaba consciente de que sus posibilidades de control directo de los dominios al otro lado del Atlántico no eran las mismas que en Europa. Necesitaba, por lo tanto, interlocutores en América y sobre todo a un grupo de aliados que, para conservar su posición privilegiada, estuviera dispuesto a defender el dominio monárquico español.⁷⁴ Aunque la Corona prefería que este grupo no fuera demasiado fuerte, una seria fricción en su seno podía convertirse también en un peligro para la conservación del Imperio, sobre todo si un sector importante empezaba a sentirse persistentemente atacado en su privilegios por las instancias metropolitanas frente a otros grupos. La introducción de la alternativa en muchos sentidos resultó ser la solución idónea para esta delicada situación. Dejó establecida la segmentación del comercio y calmó a la vez los ánimos, porque reguló las fuerzas y aumentó considerablemente la autonomía de los grupos de poder para nombrar los funcionarios del gremio. La ra-

⁷³ Valle Pavón (1998). Un enfoque teórico: Hickson/Thompson (1991).

⁷⁴ Relación del estado de la Nueva España en los dichos años de su gobierno que hace el duque de Albuquerque al duque de Linares, su sucesor en los cargos de virrey gobernador y capitán general de este reino, México, 27 de noviembre de 1710, AGI, Méx. 485, f. 31r-31v.

zón por la cual el interés en mantener sosegadas las posesiones americanas no fue argumento suficiente para hacer reaccionar a la Corona con anterioridad, se puede explicar por los motivos referidos en el párrafo anterior y por su confianza en que la pelea de las parcialidades no llegaría a más. Esto al menos lo expresó el virrey duque de Linares en 1716. Al fin y al cabo no había nadie más interesado en la paz interna que los almaceneros, lo que explicaría también por qué se les dejó el control sobre los circuitos internos de la Colonia, contraviniendo las aspiraciones de los comerciantes andaluces, y por qué se permitió que los novohispanos guardasen una rígida independencia en sus negocios y que empleasen sistemas especulativos sin escrúpulos y sin permitir que alguien interviene,⁷⁵ siempre que estas prácticas no provocaran disturbios entre los consumidores cautivos.

- ii) Lo dicho hasta aquí, sin embargo, todavía no explica qué intereses se disputaban dentro del Consulado. Una de las raíces del conflicto quizás haya sido el surgimiento de cierta homogeneidad en las fuerzas del sector del comercio. El virrey duque de Linares escribió que los comerciantes muy ricos casi habían desaparecido en México: "Lo que es cierto es que ya en las Indias no hay hombres singulares como antiguamente, de trescientos y cuatrocientos mil pesos en especie; pero generalmente desde veinticinco mil a cincuenta son infinitos los que los tienen."⁷⁶ Tal situación tenía que traducirse en un aumento de la competencia entre los comerciantes por el control del Consulado, institución que como todas las del Antiguo Régimen fue considerada como un botín, con cuya conquista las élites intentaban reforzar su posición social.⁷⁷
- iii) Salta a la vista que en los temas trascendentales de la alcabala o de las flotas los representantes oficiales del gremio de los comerciantes siempre cerraban filas y el Consulado actuó como grupo de presión frente las autoridades virreinales y de la metrópoli. Esto probablemente no es nada sorprendente, pero torna más complejos los intentos de explicar las peleas entre los partidos. Así,

⁷⁵ Relación del virrey duque de Linares a su sucesor, el marqués de Valero, s. f. [1716]. En: Torre Villar (1991: II, 783).

⁷⁶ *Ibid.*: II, 783.

⁷⁷ Compárese Thompson (1978: 138-139).

por ejemplo, las diputaciones del Consulado en la Feria de Jalapa parecen haber sido siempre mixtas. En 1729, la formaron los montañeses Juan Gutiérrez Rubín de Celis, Gaspar García de Rivero, Lucas Serafín Chacón y el vasco Miguel de Amazorraín; en 1732, los vascos Francisco de Echeveste y Miguel Alonso de Hortigosa y el montañés Juan Francisco de Oneto; y en 1736, los vascos Ignacio Mercero de Iriarte, Juan Fernández de Otaz, así como Manuel Rodríguez Pedroso, de afiliación no identificada (Trens 1947: II, 391). Que los miembros de la corporación actuaran finalmente como frente único no descarta que con anterioridad hubiera habido serias discusiones y también discordias entre las diferentes secciones del comercio sobre la política a tomar. Tal vez haya que considerar aquí un problema de fuentes. Para aclarar este punto con más precisión habría que analizar, si es que existen, los protocolos de las juntas de comercio, en las cuales el Consulado formulaba la posición oficial.

- iv) El conflicto entre las colonias y la metrópoli se suele ver inscrito en un enfrentamiento entre criollos y españoles peninsulares, otra división étnica en la sociedad colonial, como de manera algo simplificada podría resumirse. Se observa incluso que los almaceneros de la ciudad de México designaban a sus competidores flotistas como “gachupines” (Pérez Herrero 1983: 140). Sin embargo, los miembros del Consulado en su mayoría también eran peninsulares. Así que en realidad se trataba de un conflicto económico y político, en el que al menos la parte novohispana entreveró, completamente sin fundamento, un argumento étnico. La cuestión es saber si nuestro conflicto vasco-montañés es un caso de índole similar.
- v) De ser así, habría que preguntarse cuál era el objetivo del enfrentamiento entre vascos y montañeses. Una respuesta posible sería el control sobre la jurisdicción comercial. Pero según el informe del virrey duque de Linares, ya varias veces citado, este apenas valía la pena. Las funciones jurídicas del Consulado no podían haber pesado tanto, ya que ningún otro tribunal respetaba el fuero del comercio, y esto porque los comerciantes mismos en sus litigios buscaban siempre ayuda donde tenían gente conocida y, por lo tanto, más seguro les parecía el desenlace en su favor. El prior

y los cónsules aceptaron esta situación para no dañar sus relaciones con los diferentes jueces, por ejemplo con los de la Audiencia, dado el largo tiempo que seguiría a su corto periodo de dos años como funcionarios del Consulado. La ventaja de esta situación, según el virrey duque de Linares, era que los comerciantes, no obstante lo ruidoso de sus pleitos internos en torno a las elecciones, terminaban siempre por someterse a la voluntad virreinal, porque finalmente les valía más estar bien con el gobierno que con sus amigos.⁷⁸ Como en todo sistema de clientelismo, los lazos verticales importaban más que la solidaridad horizontal de clase o de oficio.

Por otro lado, en una sociedad estamental y corporativista como la novohispana de principios del siglo XVIII, este reducido interés en el control gremial sobre la jurisdicción podría sorprendernos. Sin embargo, la clase mercantil no era precisamente la más militante, como en 1753 señaló también el virrey conde de Revillagigedo en cuanto al proceder moderado del Consulado en el cobro de la alcabala; estaba más interesada en poder desarrollar sus negocios en paz y sin escándalo: “[...] la idea que llevaba era no tener contestación sobre alcabala con nadie, y excusar competencias de jurisdicción, para no hacer odiosa su administración, siendo esto muy natural, porque el manejo de este negocio estaba todo en poder de mercaderes y negociantes los más ricos de esta ciudad que son los que hacen cabeza al Consulado, y éstos, en todas partes es muy natural aborrecer el estrépito judicial y todo género de contestaciones.”⁷⁹ Además, hay varios indicios que señalan a los comerciantes como una agrupación muy inestable que carecía de la coherencia y también de la conciencia de grupo, como lo fueron los gremios medievales. Muchos comerciantes se dedicaban a negocios de los más diversos tipos, ejercían el comercio sólo pasajera y momentáneamente, lo hacían un rato desde el lado andaluz y más tarde desde el lado americano o formaban parte de familias con los más diversificados intereses. El interés personal o del clan familiar, en tal situación, solía resquebrajar la cohesión

⁷⁸ Relación del virrey duque de Linares a su sucesor, el marqués de Valero, s. f. [1716]. En: Torre Villar (1991: II, 782).

⁷⁹ Informe del virrey conde de Revillagigedo, México 22 de octubre de 1753, AGI, Méx. 2093.

gremial, pues determinó las estrategias de comportamiento, más allá de lo que hubiese exigido la pertenencia a la organización consular. Pero de todas formas hay que indagar más sobre este punto.

- vi) El virrey duque de Linares informaba a su sucesor, el marqués de Valero, que las disputas en las elecciones dimanaban del hecho de que prior y cónsules, reducidos “en sustancia a unos buenos arrendadores de las alcabalas”, podían favorecer a sus allegados con una reducción discrecional de este impuesto (fijado en un 6% del valor de la mercancía), por lo cual todos esperaban ventajas contables de la victoria electoral de sus amigos y, en caso adverso, a los vencidos solamente les cabía envidiar a los triunfadores y sus privilegios.⁸⁰ Esta circunstancia demostraría que el gremio no actuaba como un cuerpo compacto sino como una arena abierta a la competencia entre diversos actores con sus clientelas. Más tarde, cuando el Consulado ya estaba a punto de perder el arrendamiento, el virrey conde de Revillagigedo señaló las mismas reducciones, aunque advirtió que el gremio favorecía de esta forma a todo sus miembros de una manera bastante equitativa.⁸¹ En conflictos como el analizado aquí, sin embargo, los que enardecen los ánimos son a veces los pequeños privilegios que unos suponen o sospechan que se adjudican los otros.
- vii) Parece bastante probable que la pelea no estaba dirigida tanto al dominio de la institución como a la posesión de los empleos que ésta ofrecía. Estos eran oficios de honor y sobre todo entrañaban méritos, que al menos algunos de sus poseedores no se cansaban de mencionar a la Corona al solicitar alguna merced social o económicamente lucrativa. Esto funcionaba todavía mejor si en el periodo de gobierno había que hacerle algún favor al rey. Por ejemplo, el exprior Domingo de la Canal se vanagloriaba de que en su tiempo el Consulado hubiera organizado la donación de un millón de pesos para la nueva Corona borbónica, que luchaba por sobrevivir en la Guerra de Sucesión. Se le agradeció este servicio con

⁸⁰ Relación del virrey duque de Linares a su sucesor, el marqués de Valero, s. f. [1716]. En: Torre Villar (1991: II, 782).

⁸¹ Informe del virrey conde de Revillagigedo, México 22 de octubre de 1753, AGI, Méx. 2093.

el otorgamiento del hábito de Santiago, el que sin embargo cedió a su hijo Manuel.⁸² Otros ejemplos de especialistas en adquirir funciones oficiales serían Juan Gutiérrez Rubín de Celis y Juan Esteban de Yturbide, los que siempre se apoyaron en los méritos y el prestigio de sus posiciones anteriores. Es decir, ocupar el cargo de prior implicaba un mérito, ser caballero de Santiago aumentaba el rango social. Así pues, se trataba de establecer una alternancia entre méritos y mercedes, y estas últimas después se convirtieron en servicios dignos de nuevos premios. Los méritos, sin embargo, no se adquirían únicamente en la vida pública, sino que también el simple éxito económico personal podía reclamarse como tal, porque un rico comerciante o un minero afortunado generaba, además del enriquecimiento personal, considerables ingresos a la Real Hacienda. El rey no dudaba en agradecerse.

- viii) A final de cuentas, tampoco hay que menospreciar los ingresos directos que el Consulado ofrecía a sus funcionarios. El salario del prior y los cónsules no era muy alto, 500 pesos al año para cada uno, y los comerciantes pidieron varias veces un aumento, argumentando que estas sumas apenas cubrían los elevados gastos de representación que traía el cargo.⁸³ Sin embargo, había otros ingresos suplementarios. Los oficiales del regimiento de infantería que organizaba el comercio recibían, en 1734 entre 500 pesos, los capitanes, y 1.987 pesos 4 reales, el coronel, quien por entonces era Juan Gutiérrez Rubín de Celis.⁸⁴ Además, los líderes del gremio cobraban durante su mandato 2.500 pesos al año, el prior, y 2.000 pesos, los dos cónsules, por su función en la recaudación

⁸² Consulta, Madrid, 26 de septiembre de 1707, AGI, Méx. 377. Virrey duque de Alburquerque al rey, México, 4 de julio de 1708, AGI, Méx. 482A. Consulta, Madrid, 15 de septiembre de 1730, AGI, Méx. 422.

⁸³ Instrucción relativa de todos los puntos y negocios del contenido para gobierno de los señores diputados [que pasan a España], México 8 de junio de 1755, AGNM, AHH, leg. 635, exp. 8, f. 13r-14r.

⁸⁴ Cuenta de cargo y data que dan los señores Francisco de Fagoaga, Domingo Mateos y capitán Sebastián de Aziburi y Arechiga, prior y consules, México 14 de diciembre 1734, AGNM, Cons. 301, exp. 1.

de la alcabala.⁸⁵ Posiblemente a esto habría que añadir otras sumas, como las tasas de su labor judicial, regalos y gratificaciones.

- ix) En este sentido, el estudio tendría que dedicarse más a los personajes involucrados en las peleas electorales, sus fines particulares y sus opciones de acción. Al Consulado como institución, por el contrario, habría que restarle importancia en su papel de actor autónomo. No parece, por lo tanto, correcto argumentar que el Consulado controlaba los mercados internos de la colonia y que por esto la pertenencia a la organización resultaba atractiva. Más bien, sucedía que los comerciantes que llegaban a tener alguna participación en el control del mercado interno entraban en el Consulado para fortalecer su posición y para diversificar sus actividades. Esto se comprueba con el simple hecho de que, para hacerse miembro del gremio, los estatutos exigían un nivel bastante elevado de transacciones realizadas, es decir, los aspirantes ya se habían ganado con anterioridad su participación en el mercado (*Recopilación* 1987 [1681]: libro 9, título 46, ley 5 y 11). La institución les servía, entonces, de plataforma para defender sus intereses y para acaparar utilidades. Dada la intensa relación entre poder, prestigio social y economía, el Consulado servía para dar reputación y peso político a sus líderes, y sólo a éstos, por lo cual las posiciones de prior y cónsul se volvieron altamente atractivas y dignas como para entablar una lucha por su conquista. Debido a la estructura del Consulado, esta conquista se efectuó ganando una elección, para la cual los poderosos emplearon todos los mecanismos a su alcance con el fin de reclutar una mayoría entre los miembros.
- x) Muy factible parece que los pleitos, que habían empezado por motivos diversos y todavía no muy claros, adquirieron una dinámica propia y una dimensión simbólica que rebasó finalmente los motivos materiales. En 1734, por ejemplo, el Consejo de Indias llegó a la conclusión de que la permanente protesta del grupo vencido contra la elección era motivado “por creer haber perdido

⁸⁵ Certificación de Manuel González de la Serna, México 7 de julio de 1753, AGI, Méx. 2093: Testimonio de lo que importan en cada un año los sueldos que gozan el prior y cónsules del Real Tribunal del Consulado, f. 1v-6r.

la honra y quedar injuriado y agraviado”.⁸⁶ Tal motivo no hay que subestimarlo pensando en el mundo del Antiguo Régimen, donde la distinción simbólica poseía una gran importancia para el mantenimiento del orden social y también para el éxito económico personal. El hecho de que el Consejo le atribuyera tanto peso no era en vano. En 1740 se comentaba que “se ha tenido por indispensable pensar en algún medio que deje con satisfacción y sin contestaciones [a] los dos partidos”, porque “la equidad [...] dicta no deber llevarse sólo un partido el honor y la utilidad que resultan de estos oficios”.⁸⁷

Por último, queda por elucidar el papel que ocupaba lo étnico en el caso. Parece que los dos partidos contaban con un núcleo poderoso, que se reducía a unas cuantas personas, con su clientela cada uno. Para mantener esta estructura se recurría a varios mecanismos: el parentesco, la amistad y la dependencia económica mediante el avío y el crédito. La etnicidad sería uno de ellos. Pero hay que subrayar que mediante ella no se constituía una comunidad de iguales, ni siquiera dentro del reducido sector de los comerciantes. Tampoco la coherencia étnica se escapaba de la rígida jerarquización característica de la sociedad del Antiguo Régimen.⁸⁸ La etnicidad no superó la jerarquización basada en la desigualdad, sino que sirvió como mecanismo para mantenerla. Sin embargo, era sólo un factor entre otros. Para demostrar cómo las diferentes relaciones sociales se cruzaban en la vida práctica, aun si no queda claro cuál fue la primordial, basta recordar la polémica de los dos montañeses aviados por Francisco de Echeveste y las presiones que sufrieron para la elección de 1729. Al parecer, en este caso, el principio étnico no era lo decisivo, pues los dos montañeses finalmente antepusieron sus intereses económicos a la solidaridad del grupo de origen. Si hubiera más espacio, se podría enumerar aquí una serie de alianzas económicas y familiares, tanto duraderas como pasajeras, que excedían los límites étnicos.

Con el tiempo, sin embargo, la pertenencia a la etnia adquirió una posición dominante por lo menos en el nivel discursivo. Todavía en

⁸⁶ Real cédula, Aránjuez 23 de mayo de 1734, AGI, Méx. 742.

⁸⁷ El marqués de la Regalía a Miguel de Villanueva, Madrid, 29 de abril de 1740, *ibíd.*

⁸⁸ Compárese Guerra (1999: 42).

1733 los montañeses nombraron en una representación a los dos partidos como “amistades”.⁸⁹ Pero con el tiempo la denominación étnica se generalizó. La etnicidad era un principio, tal vez no primordial, pero bastante amplio como para integrar a un grupo de votantes suficientemente grande para ganar una elección. Esto pudo funcionar porque de hecho ambos grupos étnicos eran minoritarios, aunque claramente perfilados en la disputa del dominio. Organizar el Consulado según la taxonomía gachupín-criollo no hubiera funcionado, porque había demasiados peninsulares, y sólo unos cuantos criollos. Una situación así hubiese obligado a los peninsulares a recurrir a otros mecanismos para estructurarse, lo que de hecho hacían bajo la forma de partidos.

No obstante, siempre hay que relativizar la división étnica. Como todos los comerciantes, indistintamente de su origen geográfico, se tenían que unir a uno de los dos partidos, su carácter étnico desde el principio quedaba puesto en cuestión, aunque, según el estudio de Christiana Borchart de Moreno (1976: 45) sobre el periodo de 1759 a 1778, la composición de los grupos obedecía más o menos a criterios de origen regional. Pero hay sobradas excepciones en estas afiliaciones y, además, se reunieron demasiados grupos regionales como para poder afirmar que esto pasaba por la solidaridad étnica. La pertenencia a una de las dos parcialidades étnicas, la que finalmente parece menos importante que otras relaciones sociales entre los comerciantes, se manejaba siempre con bastante flexibilidad: había personas que se cambiaban de bando, otras colaboraban entre sí, no obstante su afiliación opuesta, en lo político, en los negocios y en lo privado, y tampoco faltaban fricciones en el interior de cada grupo.

Pero, por otro lado, hay que señalar que la manipulación o instrumentalización del elemento étnico para metas personales o familiares únicamente podía funcionar si existía un claro y desarrollado sentimiento de identidad, al cual se podía recurrir para crear solidaridades o reclamar apoyos. La dinámica, en la que se inscribieron los partidos de vascos y montañeses, con toda la fuerza a la que después sometía a sus miembros, y la instrumentalización de esta solidaridad está todavía por definirse con más claridad.

⁸⁹ Representación de Francisco Antonio Sánchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, México, s. f. [3 de enero de 1733], AGI, Escribanía 205B, pieza 25, f. 14r-14v.